

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310500120150031302
Proceso:	Ordinario
Demandante:	JOSE OMAR TABARES HINCAPIE
Demandado:	INTERCONEXION ELECTRICA - ISA S.A
M. P.	MARIA PATRICIA YEPES GARCIA SL TSM
Fecha de fallo:	24/02/2023
Decisión:	CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 27/02/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	JOSÉ OMAR TABARES HINCAPIÉ
DEMANDADOS	INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P ISA- E.S.P-
ORIGEN	Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín
RADICADO	05001 31 05 001 2015 00313 02
TEMAS	Renuncia inducida/ Reintegro / Estabilidad Laboral Reforzada por Salud y Retén social
CONOCIMIENTO	Apelación
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha y hora señaladas, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del art. 13 de la Ley 2213 de 2022, se constituye en audiencia para proferir sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por JOSÉ OMAR TABARES HINCAPIÉ contra INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. –ISA E.S.P.-

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda¹

El señor José Omar Tabares Hincapié formula demanda contra Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. –ISA E.S.P.-, pretendiendo se declare que **i)** estando al servicio de la demandada ostentaba limitación física y estaba enfermo, y fue presionado a renunciar, configurándose así un despido indirecto, y en virtud de ello se condene a la demandada **ii)** a reintegrarlo al mismo cargo que ocupaba al momento en que fue forzado a renunciar, con las mismas condiciones laborales, y al pago de todos los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta que se haga efectivo su reintegro, junto con el pago de las cotizaciones a seguridad social integral; **iii)** al pago de la indemnización especial por haber sido forzado a renunciar estando enfermo.

En subsidio de lo anterior, y en caso de no prosperar las anteriores pretensiones solicita se declare que **i)** medió un retiro injusto, debiendo como consecuencia reconocer la indemnización por despido injusto debidamente indexada; **ii)** el despido generó lesiones morales y materiales, al ver menguada su expectativa pensional, y en virtud de ello se

¹ 01PrimeraInstancia; 01Expediente0120150313.pdf págs. 6/9

ordene el pago de los perjuicios materiales y morales; y **iii)** costas del proceso a cargo de la demandada.

Fundamentó sus pretensiones en que se vinculó a la demandada **el 2 de septiembre de 1984 hasta el 30 de enero de 2012**, fecha en que fue obligado a renunciar, con cerca de 28 años de servicios y situación de prejubilación, padeciendo patologías psiquiátricas como *trastorno depresivo recurrente No especificado* y *depresión bipolar II*, enfermedades que requieren control farmacológico y vigilancia psiquiátrica permanente.

Desempeñó cargos como los de coordinador de mantenimiento en Manizales, Coordinador de la Dirección COM, después Centro de Transporte de Energía Suroccidente –CTE Suroccidente-, trasladado a Palmira y Director encargado del Centro de Transporte de Energía Suroccidente –Cte Suroccidente- en Palmira. En mayo de 2009 fue relevado del cargo de Director por sindicación de la Fiscalía de Popayán por supuesto enriquecimiento ilícito, quedando sin funciones, roles, propósitos u objetivos, lo que generó depresión y desarrolló un trastorno afectivo bipolar que había aparecido desde el 2005, cuyos síntomas ocasionados por el estrés laboral, derivó en su reclusión en la Clínica Valle del Lili con casi dos meses de incapacidad. A raíz del llamamiento a interrogatorio por parte de la Fiscalía y el aislamiento de sus funciones en la empresa, inició un tratamiento psiquiátrico con el doctor Hernán Rincón de la Clínica Valle del Lili, tomando medicación diaria para su trastorno depresivo e insomnio. Cuenta que desde el año 2000 estuvo sometido a estrés de trabajos de emergencia debido a continuos atentados de las voladuras de torres, por parte de grupos insurgentes, teniendo que laborar con disponibilidad durante 24 horas del día.

Afirma que fue desprestigiado, señalado, relevado de su cargo, sin que se hubiese emitido sentencia en su contra. En marzo del 2010 fue trasladado a Medellín, con el mismo salario, lo cual afectó su presupuesto, ya que dejó a su familia en Cali. Fue atendido por varios psiquiatras en Medellín, como los Doctores Camilo Pérez del Hospital Pablo Tobón Uribe; Elvia Velásquez y José Fernando Orrego, este último, quien certificó el tratamiento de psiquiatría que venía llevando desde el 16 de septiembre de 2011 con diagnóstico de trastorno depresivo bipolar y que estaba bajo medicación y tratamiento mínimo por un año, y sus antecedentes desde el año 2005.

Aduce que la demandada mintió en el proceso que adelantó al actor, al negar la evidencia de asistencia a psiquiatría, y **ante la evidencia de una detención sin respaldo alguno y sus padecimientos, se vio obligado a renunciar**, respondiendo la demandada a ello el 31 de enero de 2012 que éste había abandonado el puesto, momento para el cual tenía un sueldo integral de \$7'612.000.

Refiere que el despido indirecto de que fue objeto el actor, resulta más gravoso por estar ad portas de ser pensionado por el ISS por tener 55 años de edad, debiendo acreditar 60 años por ser beneficiario del régimen de transición.

El 22 de noviembre de 2013 reclamó ante la empresa lo acá pretendido, lo cual fue resuelto el 18 de diciembre del mismo año.

Oposición a las pretensiones de la demanda²

La demandada refiere que la terminación de la relación laboral existente entre las partes, obedeció a una decisión libre, voluntaria y unilateral del demandante, sin que argumentara causal alguna que diera lugar a un despido indirecto; niega además haber influido, presionado o determinado la decisión del ex trabajador, en dicha comunicación no manifestó razones diferentes a una decisión personal, a lo cual se informó que procedería a liquidarlos, dejando de presente la ausencia laboral del 27 de enero de 2012 sin permiso o justificación. Indica que las condiciones particulares del estado de salud del demandante no eran conocidas por la demandada, pues hacen parte de la historia clínica del demandante, la cual tiene carácter de reservado, y ellas no fueron informadas, notificadas ni dadas a conocer por el trabajador. Manifiesta que el cambio del cargo de Director del CTE Suroccidente al cargo de Especialista en la Dirección Gestión Mantenimiento, no obedeció a la sindicación de la fiscalía, ello se hizo para liberarlo de la responsabilidad del cargo de director y que asumiera las de especialista, que le permitían tener mayor disponibilidad horaria para atender el proceso penal que se adelantaba por parte de la Fiscalía, y como un acto diligente de la administración, para garantizar que en la investigación penal que se adelantaba, la Empresa no fuera cuestionada por obstrucción a la justicia o alteración de las pruebas, y así evitar poner en riesgo la prestación del servicio público de energía eléctrica en la zona en que se encontraba laborando, dada la primacía del servicio público esencial del transporte de energía eléctrica, pero nunca se disminuyó su salario, ni se vulneraron sus derechos como trabajador, y por el contrario se trató con estricto sigilo y guardando confidencialidad el proceso penal, además se le asignó una oficina individual con baño incluido y comodidades que otros trabajadores no gozaban, y además continuó participando en eventos sociales que se realizaban en el CTE.

Precisó que el inicio de la relación laboral fue el 3 de septiembre de 1984, así como los cargos en los que se desempeñó, y que la función del demandante como Director no era la de trabajar 24 horas al día.

Excepcionó: prescripción, inexistencia de la obligación, pago y, cumplimiento del derecho y buena fe.

Sentencia de primera instancia³

El 30 de abril de 2018, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, profirió sentencia declarando probada la excepción de inexistencia de la obligación formulada por Interconexión Eléctrica S.A. ESP, y en consecuencia la **absolvió** de todas las pretensiones formuladas en su contra. Condenó en costas a la activa, fijando en \$781.242 las agencias en derecho a su cargo.

Para decidir la A Quo en primer lugar analizó el fenómeno prescriptivo de que trata el artículo 151 del CPTSS, concluyendo que no operó por no haber transcurrido más de 3

² 01PrimeraInstancia; 01Expediente0120150313.pdf págs. 175/188

³ 01PrimeraInstancia; 01Expediente0120150313.pdf págs. 713/715

años entre el momento en que se elevó la reclamación administrativa -25 de noviembre de 2013- y la radicación de la demanda que lo fue el 3 de marzo de 2015.

Refirió que la renuncia presentada por el demandante el 31 de enero de 2012, no expuso en los términos del parágrafo del artículo 62 del CST incumplimiento alguno de las obligaciones o prohibiciones que correspondían al empleador, no siendo la demanda la oportunidad de expresar las razones que llevaron a dicha determinación, según lo expuesto por la H. CSJ en sentencia del 10 de 1987 al advertir que *“la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación”*. Indicó que, en respuesta a dicha carta, la demandada el 31 de enero del mismo año, ante su renuncia, y teniendo en cuenta que no se presentó a laborar a ISA desde el 27 de enero de 2012 sin justificación o permiso, procede a liquidarle definitivamente sus derechos laborales, lo cual fue realizado el 2 de febrero de ese año, razón por la cual no se configuró una renuncia provocada o despido indirecto, considerando irrelevante la testimonial allegada para dar cuenta de tales razones, por cuanto en la renuncia no se expusieron, sin realizar consideraciones en torno a si la renuncia estuvo permeada por las condiciones de salud mental del actor, en tanto la renuncia no está siendo atacada en su validez por motivo de incapacidad absoluta.

En torno a la estabilidad laboral reforzada, tras hacer un recuento normativo y jurisprudencial, señaló que, si bien el demandante presentó enfermedad de origen común, siendo tratado desde el año 2005 por diagnóstico de estrés severo y depresión, así como trastorno bipolar clase 2, en la documental allegada, la testimonial y el dictamen de pérdida de capacidad laboral practicado, no se encontró que dicha patología fuera conocida por la empresa o que haya tenido relación con la labor que desempeñaba, dejando incluso constancia en las consultas médicas, que tiene antecedentes familiares de depresión, como su padre y hermana. La única incapacidad data de octubre de 2011 estando en curso el proceso penal, de ahí que para enero de 2012 en que se configura la renuncia, no se encontraba incapacitado, ni había sido calificada su pérdida de capacidad laboral, aunado a que la terminación del contrato no provino del empleador, por ende, no se acreditaron los presupuestos fácticos de que trata la Ley 361 de 1997 para aplicar estabilidad laboral reforzada, ni era obligatorio para el empleador acudir ante el Ministerio de Trabajo para solicitar la autorización para liquidar el contrato.

Finalmente indicó que el actor tampoco contaba con la protección por su condición de pre pensionado, en tanto nació el 13 de agosto de 1958, comenzó a trabajar con ISA el 13 de septiembre de 1984, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden nacional, por lo que el sistema de pensiones para él inició el 1° de abril de 1994, momento no teniendo 40 años de edad, ni 15 años de servicio, y no estando probado que se hallara inmerso en el régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se rige por el artículo 33 de esa misma norma, según la cual, el requisito de edad de 62 años de edad para pensionarse lo alcanza en el año 2020, y la garantía de estabilidad como prepensionado se configura cuando al trabajador le faltan menos de 3 años para acceder al beneficio pensional.

Recurso de apelación: el demandante formuló recurso de alzada solicitando se revoque íntegramente la sentencia y en su lugar se acceda a las pretensiones principales o subsidiarias deprecadas, para lo cual expuso que:

i) Es errónea la interpretación que hace del artículo 62 del CST, porque, si bien tradicionalmente se ha realizado una interpretación literal en el sentido que la parte que termina el contrato es quien debe expresar las razones por las que se termina, una interpretación amplia y extensiva de ello, permite demostrar los hechos ocultos que motivaron esa renuncia, pues de lo contrario, se haría inútil cualquier proceso en tal sentido, y de antemano se negaría la justicia, lo cual contraría los postulados legales y constitucionales, aunado al erróneo análisis de las pruebas allegadas al plenario, llevan una indebida inaplicación del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

ii) La decisión deja de lado que al momento en que se produjo esa renuncia, el actor estaba bajo tratamiento psiquiátrico, y pese a que se dijo que el actor no fue atacado, lo cierto es que, si estaba cuestionado desde el momento en que se dijo que no estaba en sus cabales cuando presentó esa renuncia, en virtud de su estado de depresión y estrés, por lo cual, está viciado de nulidad, por no hallarse en ejercicio de plena voluntad, carecía de sanidad y voluntad, y carente de proporcionalidad y racionalidad que después de 28 años de trabajo renunciara voluntariamente.

iii) El actuar de la empresa da cuenta de cómo ésta lo abandonó, porque si lo hubiera apoyado no hubiera aceptado la renuncia, y en su lugar le habría concedido las reiteradas licencias solicitadas para enfrentar su problema, pero contrario a ello, dice que ha faltado al trabajo, que ha abandonado el trabajo, verdadera causa por la cual se termina la contratación laboral. Se duele de la interpretación que la Juez de Instancia hace en favor de la empresa, acogiendo como razón el haberle aceptado la renuncia.

iv) De no entenderse que hubo un despido indirecto, en el fondo se configuró un verdadero despido, como demuestra la actitud de la empresa durante el proceso en que el actor estuvo sometido a las referidas cargas y contingencias.

v) El dictamen de PCL emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, certifica que su pérdida de capacidad es severa, “casi profunda” al ascender al 44%, y si bien establece su FE para el año 2016, está acreditado que el actor presenta tales afectaciones por lo menos desde el año 2005.

vi) Le sorprende que la empresa alegara desconocer la patología del trabajador, pues desde el año 2005 presentaba una depresión severa y bipolaridad, no obstante, el certificado del psiquiatra da cuenta que se encuentra en tratamiento psiquiátrico desde septiembre de 2011, concluyendo en que, el actor no tenía voluntad plena para obrar.

vii) Refiere que dada su vinculación con ISA ostentaba calidad de empleado público, por lo cual tenía derecho a la aplicación más favorable en materia pensional, o sea el artículo 1° de la Ley 33 de 1985 que le permitía pensionarse a los 55 años de edad. Así, terminando su contrato laboral a los 54 años ostentaba la calidad de prejubilidad.

viii) Finalmente sustenta que, desde un punto de vista metodológico, debió primerio estudiarse la existencia del derecho para luego analizar la prescripción.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

Ambas partes recorrieron oportunamente el traslado para alegar de conclusión en esta instancia. La **activa**⁴ reiteró los argumentos expuestos en las alegaciones de primera instancia y en el recurso de alzada, resaltando que **a)** que es ineficaz la renuncia del actor, por encontrarse bajo tratamiento psiquiátrico; **b)** si fue despedido porque según carta del 30 de enero de 2012 se le atribuyó abandono del trabajo, pese a que se probó la solicitud de permiso para faltar a sus labores, tal y como lo declaró su jefe inmediata cuando lo encontró en un estado deplorable; **c)** el dictamen de PCL corroboró su PCL de casi el 45%; **d)** la empresa abandonó al demandante, sin brindar apoyo o solidaridad, por el contrario lo trasladó, rebajándole su estatus y condiciones laborales violando su dignidad, así como sus derechos legales y constitucionales.

Por su parte, la **demandada**⁵ insiste que el demandante renunció voluntariamente, sin acreditar una causal de incumplimiento por parte de la empresa, existiendo confesión al haber aceptado haber finalizado el vínculo laboral; y si bien el demandante intenta desviar el debate probatorio, aduciendo la existencia de un proceso penal en curso para dar por terminado el contrato de trabajo, lo cierto es que de la documental y testimonios rendidos en el proceso, se demostró que la demandada no realizó ninguna actuación en desmedro de sus condiciones laborales, contrario a ello, procuró alivianar sus cargas laborales para que afrontara dicha situación, sin desmejorar sus labores, ni prestaciones. Finalmente afirma que, tal y como concluyó la A Quo, no se configuraron elementos de juicio para inferir un despido del trabajador, y que en su renuncia haya mediado acto discriminatorio, en tanto para dicho momento no contaba con incapacidades médicas ininterrumpidas, recomendaciones y/o restricciones de carácter médico laboral conocidas por la demandada, ni tenía establecido el grado de severidad de su limitación, incluso según la historia clínica aportada, sus padecimientos psiquiátricos datan de marzo de 2005, no pudiendo extenderse la protección del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad los Arts. 15 y 66A del CPTSS.

II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de la Sala está dada por los artículos 66, 66A del CPTSS, es decir, en consonancia con los puntos que fueron objeto de apelación.

⁴ 02SEgundaInstancia; 04AlegatosDemandante0120150313.pdf

⁵ 02SEgundaInstancia; 05AlegatosIslaEsp0120150313.pdf

Examinados los hechos, pretensiones de la demanda, la sentencia y los puntos de apelación, corresponde a esta Sala determinar **a)** si se acreditó o no, la finalización del vínculo laboral entre las partes, por renuncia del demandante, inducida en razón al sometimiento de estrés, cambio de cargo y traslado de lugar de trabajo. En caso afirmativo, se definirá si **b)** si a la terminación del contrato de trabajo, el demandante estaba amparado, por una estabilidad laboral reforzada bien con ocasión de su condición de salud o bien por ostentar calidad de prepensionado; en caso afirmativo, se definirán las consecuencias derivadas de ello; o en caso negativo se estudiará en subsidio **c)** si existió una terminación unilateral y sin justa causa por parte del empleador, y de ser así se analizarán **e)** la procedencia del pago de la indemnización por despido sin justa causa, así como los perjuicios materiales y morales.

Prueba documental de relevancia:

- Registro Civil de nacimiento del demandante⁶.
- Copia de apartes de historia clínica del demandante⁷.
- Carta de renuncia del demandante del 30 de enero de 2012⁸.
- Respuesta de la demandada a carta de terminación unilateral del contrato de trabajo del 31 de enero de 2012⁹.
- Remisión de liquidación final de prestaciones dirigida al demandante, fechada el 2 de febrero de 2012¹⁰.
- Reclamación administrativa elevada por el demandante ante la demandada, solicitando lo deprecado en la demanda¹¹ -sin fecha de radicación-, la cual fue resuelta negativamente el 17 de diciembre de 2013, afirmando que la renuncia presentada fue libre, consciente y voluntaria, sin que existiera presión por parte de ISA para ello¹².
- Copia de contrato de trabajo suscrito con el demandante el día 3 de septiembre de 1984¹³, y modificación al contrato de trabajo del sistema de compensación común y ordinario al sistema de salario integral a partir del 18 de febrero de 2005¹⁴.
- Boletín de novedades N°003 del 17 de enero de 1996, sobre cambio de denominación del cargo, de Analista I Ingeniero Mantenimiento¹⁵.
- Boletín de novedades N°003 del 21 de mayo de 2009, por el cual se nombra al demandante en el cargo de Especialista para el Proyecto Confiabilidad en la Dirección Gestión Mantenimiento, a partir del 26 de mayo de 2009, continuando en su misma sede de trabajo¹⁶.

⁶ 01PrimeralInstancia; 01Expediente0120150313.pdf pág. 169

⁷ 01PrimeralInstancia; 01Expediente0120150313.pdf págs. 43/157

⁸ 01PrimeralInstancia; 01Expediente0120150313.pdf pág. 158 y 268

⁹ 01PrimeralInstancia; 01Expediente0120150313.pdf pág. 159 y 269

¹⁰ 01PrimeralInstancia; 01Expediente0120150313.pdf pág. 160 y 270

¹¹ 01PrimeralInstancia; 01Expediente0120150313.pdf págs. 161/166

¹² 01PrimeralInstancia; 01Expediente0120150313.pdf págs. 167/168

¹³ 01PrimeralInstancia; 01Expediente0120150313.pdf págs. 252/253

¹⁴ 01PrimeralInstancia; 01Expediente0120150313.pdf págs. 254/258

¹⁵ 01PrimeralInstancia; 01Expediente0120150313.pdf pág. 259

¹⁶ 01PrimeralInstancia; 01Expediente0120150313.pdf pág. 264

- Boletín de novedades N°049 del 16 de febrero de 2010, por el cual se traslada al actor a la Sede Medellín a partir del 1° de marzo de 2010¹⁷.
- Boletín de novedades N°029 del 20 de junio de 2011, por medio del cual se informa que la dependencia inmediata del actor a partir del 17 de junio de 2011 es la Subgerencia Técnica, de la Gerencia Transporte de Energía¹⁸.
- Correo electrónico del 31 de enero de 2012 remitido por la señora Gloria Patricia Arbeláez dirigido a la señora Sandra Patricia Maya Arango con copia al señor Julián Darío Cadavid Velásquez¹⁹, por medio de la cual se informa que el señor José Omar Tabares no se presentó a trabajar a ISA desde el viernes 27 de enero, sin que haya solicitado permiso para ausentarse ni haya justificado su ausencia.
- Liquidación final de prestaciones sociales del demandante por renuncia²⁰ y constancia de pagos efectuados al Sistema de Seguridad Social del actor²¹.
- Certificado de cargos desempeñados por el actor y la descripción de responsabilidades. emitida por la Dirección Corporativa de Talento Organizacional el 28 de febrero de 2014²².
- Oficios dirigidos al señor José Omar Tabares del que se desprende la existencia de un proceso penal adelantado en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares²³
- Obra dictamen de Pérdida de capacidad laboral elaborado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, decretado por la Juez de instancia, el cual fue elaborado el 30 de septiembre de 2016 y otorga una PCL del 44.98% con fecha de estructuración del 8 de febrero de 2016²⁴

a) Acreditación de que el vínculo laboral que existió entre las partes, finalizó por renuncia del demandante, inducida por estrés, cambio de cargo y traslado de lugar de trabajo.

Sea lo primero diferenciar los conceptos de despido indirecto y renuncia inducida, los que en interpretación de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, conllevan consecuencias diferentes.

En ese sentido, la Alta Corporación expresó en la sentencia **SL 4377 de 2020**:

“...renuncia inducida es aquella decisión que en apariencia es libre y espontánea, pero en la praxis estuvo viciado su consentimiento. Por tanto, en este evento, aunque no se exige que se expongan al momento de terminar la relación los motivos que conducen a renunciar, como ocurre con el despido indirecto, sí corresponde a la parte que la alega, demostrar que su voluntad estuvo viciada por la conducta asumida por el contratante”.

¹⁷ 01PrimeralInstancia; 01Expediente0120150313.pdf pág. 265

¹⁸ 01PrimeralInstancia; 01Expediente0120150313.pdf pág. 266

¹⁹ 01PrimeralInstancia; 01Expediente0120150313.pdf pág. 267

²⁰ 01PrimeralInstancia; 01Expediente0120150313.pdf pág. 271

²¹ 01PrimeralInstancia; 01Expediente0120150313.pdf págs. 272/273

²² 01PrimeralInstancia; 01Expediente0120150313.pdf págs. 282/285

²³ 01PrimeralInstancia; 01Expediente0120150313.pdf págs. 299/311

²⁴ 01PrimeralInstancia; 01Expediente0120150313.pdf págs. 482/487

En esta providencia cita y transcribe parcialmente lo expuesto en la sentencia SL 006 de 2001, con reiteración en la SL1352 de 2020, así:

*[...] los conceptos “**renuncia inducida** o sugerida” y el “despido indirecto o auto despido”, son totalmente independientes y con caracteres bien definidos.*

*En el primero de los eventos señalados, la libre y espontánea voluntad del trabajador encaminada a obtener el rompimiento del vínculo contractual, a que debe obedecer toda renuncia, se encuentra viciada por actos externos, tales como la fuerza o el engaño. Actos que, como se ha dicho, cuando provienen del empleador lo constituyen en el único responsable de los perjuicios que la terminación contractual cause al trabajador, como verdadero promotor de ese rompimiento (Sent. mayo 31 de 1960, G.J. PÁG. 1125). No se requiere, en este caso, que a la terminación del contrato el trabajador manifieste los verdaderos motivos que lo inducen a renunciar; pero, **en el eventual proceso sí tiene la carga de demostrar que su voluntad estuvo viciada al momento de romper el vínculo contractual por una cualquiera de estas conductas asumidas por el empleador.***

*En cambio, el auto despido o **despido indirecto** obedece a una conducta consciente y deliberada del trabajador encaminada a dar por terminada la relación contractual, por su iniciativa, pero por justa causa contemplada en la ley, imputable al empleador. En este caso, los hechos o motivos aducidos por el dimitente deben ser alegados al momento del rompimiento del vínculo contractual (par. art. 7º decreto 2351 de 1965) y estar contemplados como justa causa de terminación, en el literal b) del artículo 7º del decreto 2351 de 1965, debiendo ser notificados, además, al empleador con tanta oportunidad que no quede duda que la dimisión obedece realmente a los hechos alegados y no a otros distintos.*

En ambos casos, como es el trabajador quien exterioriza una voluntad dirigida a finiquitar la relación contractual, es quien corre con toda la contingencia de demostrar, o que su real voluntad se vio afectada por actos externos y eficientes de su empleador tendientes a obtener su dimisión y que, por lo tanto, es el verdadero gestor de la terminación de contrato, caso en el cual se estaría frente a una renuncia inducida o constreñida; o que, su empleador incurrió en cualquiera de las causales de terminación del contrato contempladas en el literal b) del artículo 7º del decreto 2351 de 1965, señaladas en la carta de renuncia”. (negrillas y subrayas de la Sala)

Así, aun cuando la activa a través de su apoderado judicial, pretende se declare la configuración de un despido indirecto, tal pretensión se sustenta en que fue presionado a renunciar, porque haber sido desprestigiado y relevado de su cargo en virtud de un proceso penal existente en su contra, sin que mediara sentencia, lo que realmente sitúa la pretensión dentro del contexto de la renuncia inducida, la cual será analizada en aplicación del principio *lura Novit Curia*, que implica para el juzgador como conocedor de la norma su aplicación en debida forma.

En tal sentido, por alegar que su renuncia fue provocada por la demandada, el demandante es quien *corre con toda la contingencia*²⁵ de demostrar, que su real voluntad se vio afectada por actos externos y eficientes de su empleador tendientes a obtener su dimisión.

A fin de formar el convencimiento judicial en ese sentido, el demandante aportó la comunicación fechada el 30 de enero de 2012²⁶, en la que señala:

“(...) Presento Ud. mi renuncia a partir de la fecha. Con dolor profundo, con mi alma quebrantada llegó un día que nunca esperé, que nunca soñé y que nunca construí para ello a lo largo de toda mi existencia. Al quedar hoy solo, únicamente con el amparo de mi familia y la protección Divina y buscando resarcir la verdad de mi acontecer con el caso en que injustamente he sido señalado, me lleva a una decisión de esta naturaleza. Le agradezco a usted y a través suyo también a todos los compañeros con los cuales conseguimos muchos objetivos para esta ISA, tan cara para mis afectos; tendría mucho por decir, pero cuando el alma duele tanto lo único que queda es el silencio y la oración. Que Dios los ilumine a todos ustedes y que las metas trazadas sean alcanzadas.

Atentamente, J. Omar Tabares H. (...).”

La demandada el 31 de enero de 2012²⁷ señaló “ en respuesta a su comunicación del 30 de enero de 2012 con radicado interno 201288001138-3, mediante el cual usted da por terminado el contrato de trabajo presentando renuncia a partir del 30 de enero de 2011 <sic> y teniendo en cuenta que usted no se presentó a laborar a ISA desde el 27 de enero de 2012, sin que hubiera solicitado permiso para faltar al trabajo o justificado su ausencia, la Empresa procederá a liquidarle definitivamente sus salarios, vacaciones y demás derechos laborales. (...)”

El **demandante absolvió interrogatorio de parte**, reiterando las pretensiones y sus fundamentos, indicando especialmente sobre el cambio de cargo de Director CTE al de especialista, aceptando que le fueron conservadas las condiciones laborales, pero no las características y calidades del trabajo; aceptó que le asignaron una oficina completamente independiente dentro del área de las instalaciones del CTE Suroccidente, y que fue relevado de las funciones administrativas. Niega que con el cambio de funciones haya tenido más tiempo para encargarse de la investigación penal que cursaba en su contra, aduciendo que esos tiempos eran asignados para el abogado, pues “*seguía cumpliendo con un horario determinado, en una jornada determinada de acuerdo con las instrucciones recibidas y emanadas desde el mismo reglamento y de la dirección de la empresa*”; afirma que pasó a no tener función alguna hasta el año 2010 en que fue trasladado a la ciudad de Medellín. sostiene que solicitó permiso para ausentarse de la empresa el 26 de enero del 2012, porque venía presentando un estado completamente depresivo, y su jefe inmediata al verlo en ese estado y “llorando” le dijo que se tomara todo el tiempo que necesitara; acepta que después de ese día no se volvió a presentar en la compañía explicando que ello se

²⁵ Carga procesal

²⁶ 01PrimeraInstancia; 01Expediente0120150313.pdf pág. 158

²⁷ 01PrimeraInstancia; 01Expediente0120150313.pdf pág. 159

debió a “*unas circunstancias de un proceso que me llevaron a una condición completamente de desmotivación, desánimo, de una presión personal impresionante. El día anterior había asistido a una cita donde el médico psiquiatra, y me vio tan mal que me quiso incapacitar y yo diciéndole, que no, porque pues en ISA era casi una vergüenza tratar de decir que uno estaba incapacitado por una enfermedad mental, por eso no pude asistir*”. Negó haber presentado voluntariamente la carta de renuncia, insiste que se vio obligado por las circunstancias, afirmando que desde la semana anterior escribió unos correos a su jefe inmediato solicitando la asesoría en la situación por la que estaba pasando, y no recibió respuesta alguna.

La parte demandante no solicitó prueba testimonial, y por su parte, la demandada solicitó los testimonios de Julián Darío Cadavid Velásquez, Luis Eduardo Jojoa Ricaurte, Gabriel Jaime Melguizo Posada, Gloria Patricia Arbeláez Maldonado, Giovanna Londoño Herrera, Claudia María Zapata y Ana Cristina Palacio Montoya²⁸. Los dos primeros testigos rindieron su declaración ante el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Cali a quien se comisionó para la recepción de tal prueba²⁹.

El señor **Julián Darío Cadavid Velásquez** aceptó conocer al demandante, desde el año 1988 o 1990 por haber trabajado juntos en Interconexión Eléctrica S.A., fungió como Gerente General de Inter Colombia, una filial de ISA y desde finales de 2007 fue jefe del actor. Indicó que el demandante laboró alrededor de 26 o 28 años, tuvo por último el cargo de Especialista en Mantenimiento y previamente el de Director del CTE en el Suroccidente; adujo que éste presentó una renuncia voluntaria en enero del 2012 y nunca notificó a la empresa problema alguno de salud, y si bien aceptó que conoció de algunas incapacidades éstas no fueron prolongadas y desconoce la patología especial, negó conocer que tuviera problemas de bipolaridad, depresión o estrés. Sobre los cambios del cargo del actor narró que era ingeniero de mantenimiento en la Sede de Manizales, luego esa oficina fue trasladada para Palmira Cali, donde asumió el cargo de Director, aproximadamente entre los años 2002-2003; después de ello, llegó una citación de la Fiscalía donde él tenía una investigación y “*para que tuviera tiempo de su defensa decidimos ponerlo de especialista, con el fin de que él se pudiera defender de forma adecuada*”, porque dicho cargo tiene una carga administrativa más alta, brindándole acompañamiento laboral y administrativo en lo que requiriera. Negó que hubiera requerido el servicio jurídico de la empresa; contó que pasó de Director a Especialista en las mismas oficinas en Palmira, donde estuvo alrededor de 1 año, luego aceptó su traslado para Medellín en igualdad de condiciones de cargo y remuneración de especialista. Desconoce además si tuvo algún problema de salud a raíz de la investigación penal, proceso sobre el cual negó tener conocimiento por su confidencialidad, ni si fue declarado inocente o culpable. El demandante se ausentó del trabajo de 3 a 5 días, por lo cual se le remitió una carta pidiendo explicara tal situación y nunca lo hizo, y envió una carta a través de un tercero manifestando su renuncia.

Luis Eduardo Jojoba Ricaurte conoce al demandante desde hace más de 18 años por haber laborado juntos en la empresa Interconexión Eléctrica S.A., donde tuvo el cargo de Director de CTE Norte y el demandante de Director de la Regional Suroccidente del

²⁸ 01PrimeraInstancia; 01Expediente0120150313.pdf pág. 184

²⁹ 01PrimeraInstancia; 01Expediente0120150313.pdf pág. 433/434

país; él fue quien reemplazó al demandante como Director cuando se le cambió al cargo de Especialista de la Dirección Gestión Mantenimiento, quien estuvo primero en Cali y luego en Medellín. Adujo que el cargo de especialista en jerarquía es inferior al de Director, y que dicho cambio se ocasionó porque *“se presentó un inconveniente en la empresa a raíz de la voladura de torres y hubo un tema en la cual estuvo involucrado unos contratistas de acá de la región, como él era el Director de la región entonces, él, digamos que se vio metido en ese asunto, entonces la empresa con el objetivo de brindar la posibilidad de que José Omar tuviera como la tranquilidad para enfrentarse pues a esta clase de problemas, entonces simplemente lo liberó de la responsabilidad que tenía en la dirección y le dijo, venga encárguese más bien, tenga un trabajo acá, otro cargo, que es uno de los cargos que son importantes de la empresa para que él tuviera el tiempo suficiente y lo liberaron como de la responsabilidad de la Dirección”*, ello con el fin de que tuviera el tiempo suficiente para atender el proceso. Niega conocer si el actor a raíz de estas problemáticas tuvo algún problema emocional o psíquico. Tiene conocimiento que éste dejó de trabajar en la empresa cuando estaba en Medellín, pero ignora la fecha exacta o los motivos, ni si durante el tiempo en que laboró padecía de alguna enfermedad, ni si la empresa tenía conocimiento de ello.

El juzgado de instancia recepcionó los testimonios de **Gloria Patricia Arbeláez Maldonado** y de **Gabriel Jaime Melguizo**, quienes conocieron al demandante por haber laborado juntos en ISA desde hace más de 15 años. La primera refirió que el último cargo del actor fue el de Especialista en la subgerencia técnica en renovación y expansión, en el cual ella fungía como Coordinadora, y con anterioridad fue Director del CTE Suroccidente, cambio que se debió a que la empresa le ofreció un tiempo porque *“él tenía una situación”*, y luego pasó a trabajar en la Ciudad de Medellín en la Gerencia de Transporte; sobre los referidos cargos, indicó que *“él como especialista estaba al frente de varios proyectos que se estaban ejecutando en ISA y en la gerencia de proyectos, definiendo alcances, solicitando aclaraciones, realizando ajustes, haciéndole un seguimiento detallado al desarrollo de todos los proyectos, y con el director, él allá era responsable de la operación, mantenimiento y tenía personas a cargo, como analista, como especialista no tenía ningún tipo de personas a cargo”*; explicó que dicho cambio se debió a decisiones que tomó la empresa para reorganizar un grupo para estar al frente de la renovación y expansión, el José Omar le manifestó la tarde de un miércoles que no podía ir el jueves porque debía atender una situación personal sin especificar cuál, y después no volvió a trabajar, niega que estuviera incapacitado para trabajar o que padeciera de enfermedades; y admite que en la empresa se comentaba algo sobre una situación penal que José Omar venía atendiendo.

El segundo testigo señaló que fue jefe directo de José Omar cuando éste era director de una de las regionales, y tenía contacto directo con el ingeniero de operación de la Regional Suroccidental que él dirigía en la sede de Palmira; que estando allí presentó inconvenientes con un procedimiento con la fiscalía, razón por la que se le ofreció un traslado a Medellín para trabajar en un área que ya no era la dirección de la regional, sino como especialista, último cargo que desempeñó. Indica que cuando fue llamado a un proceso con la fiscalía, el cargo de Director requería de mucha responsabilidad por lo cual él y Julián Cadavid, viajaron a Palmira a hablar con José Omar, y le ofrecieron todo el tiempo que requiriera para dedicarse a gestionar tales asuntos, le dijeron *“vamos a traer una persona para que se encargue de la dirección del CTE, (...) y vos vas a tener*

*una oficina en el primer piso de este mismo edificio y todo el tiempo que necesites sin límite, para dedicarte a gestionar tus asuntos con la fiscalía; (...) ese fue el ofrecimiento que le hicimos como empresa y así empezamos a trabajar de esa manera”, y al cabo de 4 meses, el demandante les manifestó que quería ocuparse en cosas que no fueran exclusivamente lo de la fiscalía y comenzar a trabajar en algo, por lo cual ellos le propusieron un traslado, así “ hay una oportunidad en ISA, en Medellín; un cargo que no requiere tanta responsabilidad administrativa”. Un director de CTE tiene unas responsabilidades administrativas sumamente grandes y entonces dijimos, **hay una posibilidad en Medellín como especialista para gestionar los temas que tiene que ver con la reposición de los activos. José Omar aceptó esta opción y de esa manera se materializó el traslado para Medellín”**; precisó que continuó con el mismo salario, solo operó una disminución de la carga administrativa, y dicho traslado no era de forzosa aceptación por parte de José Omar, quien se motivó por las conversaciones sostenidas en torno a tener un nuevo espacio laboral, y dada la aceptación verbal, se realizó el boletín de traslado. **Sostuvo que dicho cargo era de mucha relevancia como muchos otros cargos, incluso como el de Director que ostentaba anteriormente, incluso se señaló que necesitaban una persona con el nivel de él para esa responsabilidad, y dentro del organigrama seguía dependiendo directamente de él.** No recuerda si el demandante solicitó acompañamiento jurídico por parte de la empresa en su proceso penal. Conoce que la relación laboral se terminó por renuncia que el actor presentó; no recuerda que tuviera incapacidades para ese momento, ni sabe si padecía de alguna enfermedad, acepta que con anterioridad a la renuncia éste se ausentó por incapacidad médica, pero no las conoció. No recibió ninguna manifestación de inconformidad del actor por el traslado a Medellín; ni le expresó alguna razón que lo llevara a renunciar, ello lo tomó por sorpresa, y resalta que, tanto en el cargo de Director como de Especialista, el actor desempeñó sus funciones a cabalidad.*

Pues bien, entre los argumentos expuestos por la activa para afirmar que se vio obligado a renunciar se extraen los siguientes:

- i) En el año 2009 fue relevado del cargo de director por Sindicación de la Fiscalía de Popayán por supuesto enriquecimiento ilícito, quedando sin funciones, ni roles, lo que le generó depresión y trastorno afectivo bipolar.
- ii) Fue desprestigiado, señalado, relevado de su cargo, sin haberse emitido sentencia en su contra y trasladado en marzo del 2010 a Medellín.
- iii) Por estrés laboral desarrollado alrededor del año 2000 debido a trabajos de emergencias originadas en continuos atentados de voladuras de torres que le obligaban a laborar con disponibilidad durante 24 horas al día.
- iv) La semana anterior a presentar la renuncia, escribió correos electrónicos a su jefe inmediato solicitándole asesoría por la situación que estaba atravesando, pidiendo orientación, sin que recibiera respuesta, por lo que aunado al estado de depresión renunció.

Estudiada en conjunto la prueba recaudada dentro del proceso, concluye la Sala que el demandante **no logró formar el convencimiento judicial en torno a que su voluntad se vio afectada por actos externos de su empleador** tendientes a obtener tal renuncia por las siguientes razones:

No acreditó que el cambio de cargo de Director al de Especialista implicara que no volviera a desarrollar funciones dentro de la organización, por el contrario, los testigos de las demandadas, dieron cuenta que dicho cambio fue con miras a que el actor tuviera tiempo para atender el proceso penal que estaba cursando en su contra, dada la alta carga administrativa que tenía el cargo de Director, lo cual no implicó la desmejora en sus condiciones laborales, se garantizó su mismo rango salarial y le fue asignada una oficina independiente dentro de la misma sede donde ejercía sus funciones previas en la sede de Palmira, lo cual fue aceptado por el actor en su interrogatorio de parte. De las deponencias de los señores Luis Eduardo Jojoba Ricaurte, Gabriel Jaime Melguizo quien fungió como jefe inmediato y Patricia Betancur Arbeláez en calidad de coordinadora, se desprende que el cargo al que fue asignado el señor José Omar tenía una gran relevancia, pues el cargo de director implicaba según dichos del testigo Gabriel Jaime Melguizo, la responsabilidad técnica y administrativa de toda la zona Suroccidente del país, lo cual comprendía *“un grupo de mantenimiento de líneas, un grupo de mantenimiento de subestaciones, un grupo de mantenimiento de protecciones; un grupo de atención de las subestaciones, que llamábamos grupo de operación y un grupo de gestión administrativa; eso pueden ser más o menos del orden de personal fijo directamente vinculado, unas 50 personas más o menos y los contratos que de ahí se derivaran”*, e implicaba que se involucrara en gestiones fuera de horario de trabajo; mientras que la responsabilidad de especialista era eminentemente técnica, y lo que se buscaba era su apoyo en la definición y ejecución de un plan de adquisición de equipos en el largo plazo, no tenía a su cargo a ninguna persona y no se laboraba fuera del horario.

Lo anterior, desvirtúa las afirmaciones realizadas por el demandante en torno a que haya sido relevado de todas sus funciones o roles, pues los testigos refieren que el cambio de cargo no implicó eximirlo totalmente de sus funciones, lo pretendido con ello, fue alivianar la carga administrativa que tenía por el desempeño del cargo de director, y así pudiera ocuparse del proceso penal que cursaba en su contra.

En cuanto a su traslado hacia Medellín, coinciden los testigos Luis Eduardo Jojoba Ricaurte, Julián Cadavid Osorio y Gabriel Jaime Melguizo en le fue ofrecido buscando apoyar al actor, especificando este último que fue decidido en conversaciones sostenidas entre él, Julián Cadavid y el demandante, donde éste último les expresó su interés de tener nuevas funciones, y así no centrarse exclusivamente en el proceso penal, siendo previamente aceptada y de forma verbal por el demandante, y en virtud de ello se expidió el boletín de novedades, no pudiendo inferirse que dichos cambios se hicieran con el ánimo de desprestigiar su rol dentro de la empresa.

Se duele el demandante que desde el año 2000 estuvo sometido al estrés de trabajos de emergencia debido a atentados de voladuras de torres por grupos insurgentes, que le obligaba a laborar en disponibilidad de 24 horas, sin embargo, no allegó elemento

probatorio alguno en torno a que dicha situación de emergencia se prolongara hasta el año 2012 y que ello fuera lo que motivara su dimisión.

No acreditó los múltiples permisos y solicitudes que afirma elevó vía correo electrónico ante la empresa la semana anterior a presentar su renuncia, por el contrario, aceptó que no se volvió a presentar desde el 27 de enero de 2012 ni justificó su ausencia, como reconoció en el interrogatorio de parte *“es cierto que yo no me volví a presentar a laborar a la compañía desde el día 27, por unas circunstancias de un proceso que me llevaron a una condición completamente de desmotivación, desánimo, de una presión personal impresionante. El día anterior había asistido a una cita donde el médico psiquiatra, y me vio tan mal que me quiso incapacitar y yo diciéndole, que no, porque pues en ISA era casi una vergüenza tratar de decir que uno estaba incapacitado por una enfermedad mental, por eso no pude asistir”*.

Cabe precisar, que si bien en su recurso de alzada la activa dirige uno de sus argumentos a sustentar que al momento en que se produjo esa renuncia, se encontraba en tratamiento psiquiátrico, por lo cual no se hallaba en sus *“cabales”* en virtud de su estado de depresión y estrés, estando por ello, viciado de nulidad el acto de renuncia por no mediar plena voluntad, en principio no procede realizar un análisis en relación a dichas afirmaciones, por cuanto dicha circunstancia atiende no a la existencia de fuerzas externas que lo hayan motivado a tomar la decisión de renunciar, es decir, renuncia inducida como fue pretendido en el curso del proceso, sino a vicios de nulidad por ausencia o afectación de su voluntad en virtud de su tratamiento psiquiátrico, lo cual no fue pretendido, ni fue sustentado en los fundamentos fácticos, y por tanto no hizo parte del debate probatorio.

Al respecto cabe recordar que a la luz del artículo 25 del CPTSS es deber de la parte actora formular las pretensiones y hechos del líbello introductor de forma clara y precisa, pues de formularlo de forma abstracta lesiona los derechos de defensa y contradicción, conllevando a la contraparte en una imposibilidad de asumir una oposición congruente a lo pedido, al respecto, **en sentencia del 25 de octubre de 2019, con radicado 40109, reiterada en las SL9318 y 16497 de 2016**, la H. CSJ ha advertido que:

(...) las pretensiones de una demanda, además de reunir las exigencias propias de su formulación, requieren ser claras y precisas y traer consigo los supuestos fácticos que las apoyen o las respalden, que es lo que finalmente permite al Juez del trabajo resolverlas, pues la claridad y precisión de las peticiones y los hechos son fundamentales. De allí que se sostenga que una demanda deficiente perjudica al propio accionante, en la medida que el juez no puede sustituirlo en la afirmación de los hechos omitidos, ni modificarlos cuando la manifestación es defectuosa, a más que ello iría en contra del derecho de defensa que le asiste al demandado.

(...)

Igualmente, en casación del 23 de mayo de 2001 radicado 15771, reiterada en sentencia del 13 de octubre de 2006 radicación 28130, la Sala puntualizó:

“(....) El derecho de defensa y el debido proceso exigen que la relación jurídica procesal quede delimitada ab initio en el juicio. Es por eso que el demandante, al elaborar su demanda laboral, debe ser cuidadoso no sólo al formular las pretensiones, sino de manera muy especial al presentar los hechos que constituyen la causa petendi. Si bien las falencias en cuanto a las primeras pueden ser

reparadas en los juicios del trabajo por el juzgador de primer grado, en el desarrollo de la facultad extra petita, a condición de que los hechos que le sirven de apoyo hayan sido planteados y discutidos en juicio, no puede ese mismo funcionario, ni ningún otro, corregir el rumbo del proceso trazado por el accionante, alterando la causa petendi en que éste fincó su acción.”

De esta manera, si bien, no resulta oportuno emitir pronunciamiento en torno a vicios de nulidad existentes al momento de suscripción de la renuncia, porque ello derivaría en las vulneraciones advertidas a la contraparte, **aun así**, de adentrarse en dicho estudio, la Sala llega a la conclusión de su no prosperidad, **dado el exiguo esfuerzo probatorio de la activa, porque pese a constar en la historia clínica del paciente que desde 2005 fue tratado por depresión, ciclotimia, y luego bipolar II, no allegó elemento suficiente para dar por acreditado de manera idónea que, al momento de presentar renuncia de su cargo, la identidad de su padecimiento era de tal magnitud que se encontrara con trastorno límite de personalidad de modo que no pudiera tomar decisiones por sí mismo.**

Por lo dicho a este punto, concluye la Sala que no se presentó, o al menos no se demostró en el caso del señor José Omar Tabares Hincapié, la existencia de causales de una renuncia inducida, lo que conduce a **confirmar la sentencia objeto de apelación, pero por las razones aquí expuestas.**

b) Estabilidad laboral reforzada por condición de salud y por calidad de prepensionado.

El artículo 26 de la Ley 361 de 1997³⁰, consagra que:

“En ningún caso la discapacidad de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha discapacidad sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona en situación de discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su discapacidad, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo.

No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su discapacidad, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren³¹”.

Mediante **Sentencia C-531 de 2000** se realizó control a dicha norma, en ella se concluyó que contemplar sólo una indemnización de 180 días para remediar la

³⁰ La modificación introducida por el artículo 137 del Decreto 19 de 2012, fue declarada inexecutable mediante Sentencia C-744 de 2012

³¹ El segundo inciso fue declarado condicionalmente executable por la H. Corte Constitucional en sentencia C-531 de 2000, bajo el entendido que “carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su limitación sin que exista autorización previa de la oficina de Trabajo que constate la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o terminación del respectivo contrato”.

discriminación de una persona en situación de discapacidad resultaba insuficiente a la luz de los estándares constitucionales. Por lo cual declaró su exequibilidad, pero condicionada a que se entendiera que *“carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su limitación sin que exista autorización previa de la oficina de Trabajo que constate la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o terminación del respectivo contrato”*; de manera que si se pretende desvincular a una persona bajo las condiciones de salud ya descritas, de la cual tiene conocimiento su empleador, éste deberá contar con autorización de la Oficina del Trabajo, pues de lo contrario la terminación será ineficaz

De otro lado, el artículo 12 de Ley 790 de 2002 consagra la figura de la estabilidad laboral para aquellas personas que por tener unas condiciones especiales, no pueden ser retirados del servicio, así lo reguló: *“De conformidad con la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública las madres cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la presente ley”*. (Negrillas propias)

El Alto Tribunal Constitucional, ha desarrollado la tesis de la estabilidad laboral es una garantía de carácter constitucional³² de los trabajadores del sector público o privado, de no ser desvinculados de sus cargos cuando se encuentren ad portas de cumplir con los requisitos para acceder a la pensión de vejez, y la define como una *“garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si no existe una causa relevante que justifique el despido. La doctrina ha entendido entonces que el principio de estabilidad laboral configura, en cabeza de los trabajadores, un verdadero derecho jurídico de resistencia al despido⁶⁰¹, el cual es expresión del hecho de que los fenómenos laborales no se rigen exclusivamente por el principio de la autonomía de la voluntad, ya que están en juego otros valores constitucionales, en especial la propia dignidad del trabajador y la búsqueda de una mayor igualdad entre patrono y empleado. Por ello, en función del principio de la estabilidad laboral, y de la especial protección al trabajo (CP Arts. 25 y 53), no basta el deseo empresarial para que pueda cesar una relación de trabajo, sino que es necesario que se configure una justa causa, en los términos señalados por la ley, y en armonía con los valores constitucionales³³”*.

En el caso objeto de estudio, no procede ahondar en el análisis de la estabilidad laboral reforzada por su condición de salud, ni de prepensionado, al no encontrarnos ante el despido del trabajador, sino frente a renuncia voluntaria de éste, (no desvirtuada), como consecuencia de no haber acreditado en el proceso la configuración de la renuncia inducida por causas externas de su empleador.

³² Ver Sentencia T-186 de 2013, reiterada en la T 638 de 2016

³³ Sentencia T 638 de 2016

No obstante, debe resaltarse de un lado, en torno a sus condiciones de salud, que aun cuando de los apartes de la historia clínica del actor, se desprende que este padece de depresión severa y trastorno de bipolaridad, no acreditó que la demandada tuviera conocimiento de sus padecimientos. Al ser preguntados los testigos de la demanda sobre ello, todos negaron tener conocimiento sobre alguna enfermedad que afectara el demandante. Y en segundo lugar, se tiene que el demandante nació el 13 de agosto de 1958, por lo que al 1° de abril de 1994 cuando entró en vigencia el SGSSP para él, por trabajar con una empresa de servicios públicos constituida originalmente como Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden nacional, contaba con 35 años de edad; tampoco acreditó tener 15 o más años de servicios y/o cotizaciones³⁴, por tanto, si en algún momento fue beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cumplió 60 años de edad después de 2014, siéndole aplicable para efecto de reconocimiento pensional lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, que le exige tener más 62 años de edad y 1.300 semanas cotizadas, de manera que al momento de la renuncia - 30 de enero de 2012- tenía 53 años de edad, por ende, no ostentaba la calidad de prepensionado.

Consecuente con lo anterior, ha de **confirmarse la sentencia en este aspecto, pero por las razones aquí expuestas**, y a que, por sustracción de materia, no se continúe con el análisis propuesto al plantear el problema jurídico en esta instancia.

III. EXCEPCIONES

Las excepciones formuladas por quién conforma la pasiva, quedan resueltas implícitamente al no haber prosperado lo pretendido.

IV. COSTAS

Costas en esta sede a cargo de la parte demandante al haber sido vencida en su recurso de alzada conforme lo dispuesto por el artículo 365 del CGP. Agencias en derecho en el equivalente a medio SMLMV para el año 2023.

V. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

³⁴ Refiere que inició a laborar en favor de la demandada en septiembre de 1984, y no acreditó tener vinculaciones laborales anteriores a dicha fecha, acreditando por tanto solo 9 años laborados.

RESUELVE

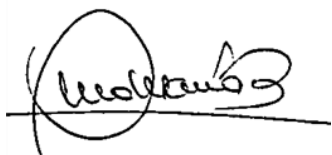
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, del 30 de abril de 2018 dentro del proceso ordinario laboral de doble instancia promovido por el señor JOSÉ OMAR TABARES HINCAPIÉ contra INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.

SEGUNDO: Costas a cargo de la parte demandante. Agencias en derecho en el equivalente a medio SMLMV en el año 2023.

Los Magistrados,



MARIA PATRICIA YEPES GARCIA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN
(En ausencia justificada)